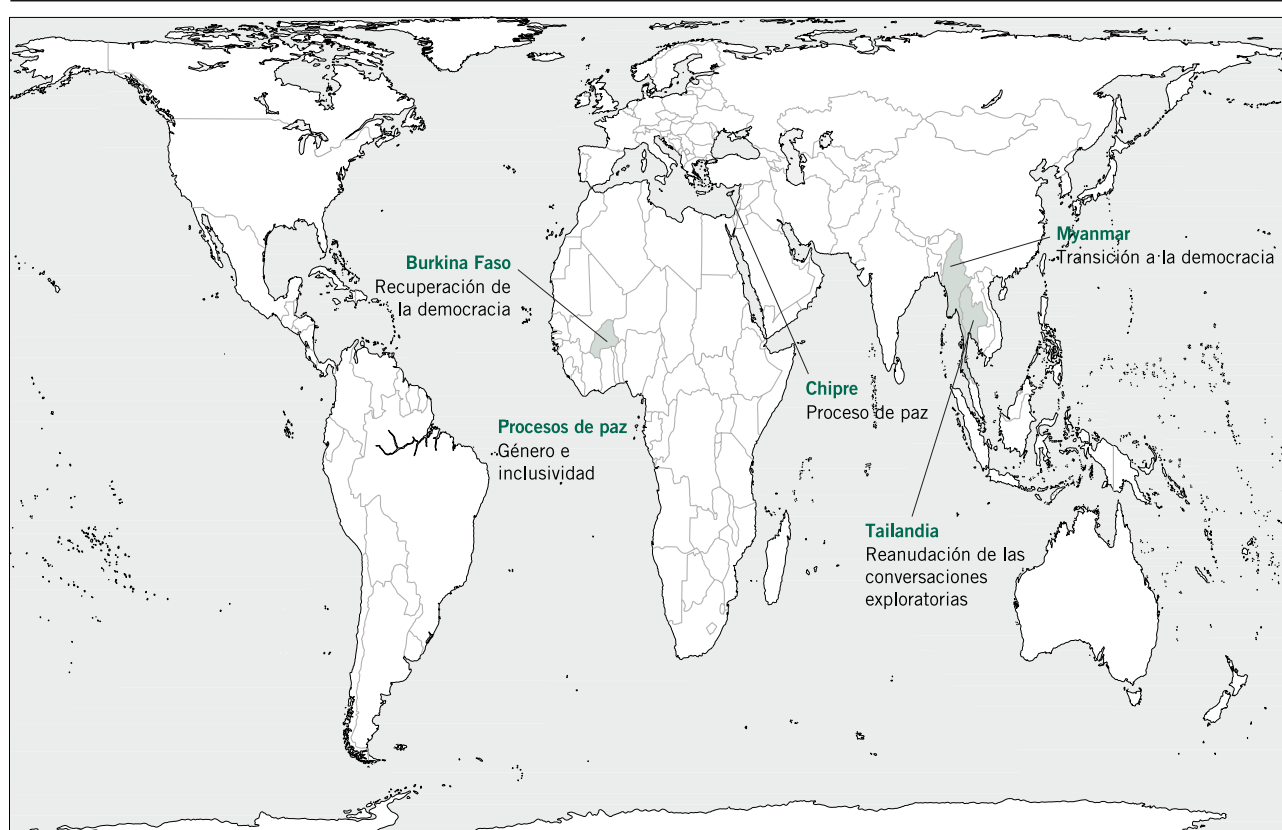


5. Oportunidades de paz para 2016

Tras el análisis del año 2015 en materia de conflictividad y construcción de paz, la Escola de Cultura de Pau de la UAB destaca en este capítulo cinco ámbitos que constituyen oportunidades de paz para el año 2016. Se trata de contextos donde existe o ha habido en el pasado una situación de conflicto armado o de tensión en los que confluyen una serie de factores que pueden conducir a su transformación positiva y/o temas de la agenda internacional que pueden contribuir, a corto o medio plazo, a la construcción de la paz. Las oportunidades identificadas de cara a 2016 hacen referencia al reinicio de las negociaciones de paz en Chipre, a la nueva etapa política en Burkina Faso tras concluir el proceso de transición, a la exploración de escenarios de paz en Tailandia, al proceso de transición hacia la democracia y la paz en Myanmar y al positivo impacto de la introducción de la perspectiva de género en los procesos de paz en términos de inclusividad y sostenibilidad.

Todas estas oportunidades de paz requerirán del esfuerzo y compromiso real de las partes implicadas y, en su caso, del apoyo de actores internacionales para que las sinergias y factores positivos ya presentes conduzcan a la construcción de la paz. En este sentido, el análisis de la Escola de Cultura de Pau pretende ofrecer una visión realista de estos escenarios y temáticas, identificando los elementos positivos que alimentan las expectativas de cambio, pero poniendo de manifiesto también las dificultades que existen y que podrían suponer obstáculos para su materialización como oportunidades de paz.

Mapa 5.1. Oportunidades de paz para 2016



5.1. El reinicio de las negociaciones en Chipre: ¿El proceso de paz definitivo?

El año 2015 fue testigo del reinicio de las negociaciones formales de Chipre para la consecución de una solución al conflicto no resuelto de la división de la isla, territorio partido *de facto* desde la invasión militar de Turquía en 1974 en respuesta al derrocamiento del presidente chipriota Makarios en un golpe que pretendía la unificación con Grecia. En los últimos años, intentos de paz oficiados por la ONU no consiguieron resultados positivos, como el Plan Annan (2004), el Proceso Gambari (2006) el proceso iniciado en 2008 y otros acercamientos sucesivos. Tras un periodo de estancamiento de algo más de medio año, el proceso de diálogo se reanudó en mayo de 2015 con nuevos factores alentadores: liderazgo local plenamente comprometido con el proceso; apoyo claro de la comunidad internacional; relanzamiento del diálogo en un formato intenso orientado a la consecución de resultados y avances tangibles entre mayo y diciembre, incluyendo medidas de confianza significativas y acuerdos preliminares sobre temas de peso; y movilización de actores no gubernamentales de ambas comunidades de la isla. Al mismo tiempo, el conflicto no resuelto de Chipre tiene una larga historia de intentos de paz fallidos – incluyendo en la fase final de ratificación popular–, las partes mantienen diferencias profundas entre asuntos sustantivos y su dimensión internacionalizada lo sitúa en una posición sensible ante factores externos. La ventana de oportunidad es clara, lo que requiere de un proceso de acompañamiento sostenido y plenamente volcado, con el fin de superar obstáculos y aprovechar la coyuntura favorable.

El reinicio de las negociaciones en Chipre en 2015, de la mano de la voluntad de los líderes locales, iniciativas de actores no gubernamentales y una amplia batería de medidas de confianza, podría dar frutos sustantivos en 2016

Las interrupciones periódicas de las negociaciones en estos últimos años –parón entre finales de 2012 y febrero de 2014 a causa de la crisis económica en la isla y por la influencia de la presidencia de turno de la UE ostentada por Chipre; así como entre octubre de 2014 y mayo de 2015– dieron paso finalmente en mayo al reinicio formal del proceso de paz. En esta reanudación influyó la decisión de ambas partes, así como de Turquía, de paralizar las medidas unilaterales de exploración de reservas de hidrocarburos en el Mediterráneo. A partir de ahí, y en un contexto en que la ONU constató la existencia de condiciones adecuadas para el diálogo, se puso en marcha de nuevo el proceso negociador en línea con la declaración conjunta de febrero de 2014, de siete puntos (constatación de que el *status quo* es inaceptable; determinación de los líderes de reanudar negociaciones estructuradas y orientadas a resultados, y en que todos los temas no resueltos estarán en la mesa negociadora, serán abordados de manera independiente, con el fin de alcanzar un acuerdo lo antes posible; admisión de que la resolución del conflicto está basada en un Chipre unido, con modelo de federación bicomunal y bizonal y

con igualdad política, ciudadanía única y personalidad legal internacional única; requerimiento de aprobación de la solución en referéndums simultáneos separados; el principio de que nada está acordado hasta que todo está acordado; plenos poderes para las personas negociadoras y posibilidad de que los líderes de ambas comunidades se reúnan cuantas veces sea necesario; y compromiso de las partes con la creación de un clima positivo). En esta decisión de reinicio del diálogo sobre una base consensuada, confluyeron además diversos factores que refuerzan las perspectivas de un proceso sostenible.

En primer lugar, cabe destacar el compromiso con el proceso por parte del liderazgo local, tanto del líder grecochipriota, Nicos Anastasiades, como el nuevo líder turcochipriota, Mustafa Akıncı, elegido en segunda ronda en los comicios turcochipriotas de abril de 2015.

En su etapa como alcalde de la parte turca de Nicosia entre 1976 y 1990, Akıncı fue impulsor de proyectos de colaboración entre las dos comunidades de la isla. La voluntad de ambos se plasmó desde el comienzo, a través del compromiso con un proceso intenso y la puesta en marcha desde el inicio del proceso de medidas significativas. Entre las primeras acciones, destacó el paseo simbólico de ambos mandatarios por el casco antiguo de las partes grecochipriota y turcochipriota de Nicosia, durante el cual enfatizaron su compromiso de alcanzar una solución y de visión conjunta para un Chipre unido. En un formato negociador como el de Chipre –basado en el liderazgo político y sus equipos negociadores–, la existencia de voluntad clara a ese nivel y su simbología es clave para el proceso. Al mismo tiempo, conviene señalar que Chipre celebrará elecciones parlamentarias en mayo de 2016, lo que podría influir en el ambiente político, si bien Anastasiades –elegido en febrero de 2013– tiene por delante dos años más de mandato y una posible renovación. En todo caso, y para prevenir posibles influencias negativas de la campaña electoral, el presidente Anastasiades señaló, por ejemplo, que no sería posible organizar un referéndum sobre la solución pocos meses antes de la cita electoral.

Otro factor que fortalece el nuevo proceso electoral es el acompañamiento internacional, tanto a través del papel mediador de la ONU, como del apoyo explícito mostrado por actores internacionales con implicaciones en el conflicto, como Grecia y Turquía –referentes, respectivamente, de la comunidad grecochipriota y de la turcochipriota, y con presencia militar en la isla por parte de Turquía. El nuevo asesor especial del secretario general de la ONU sobre Chipre, el diplomático noruego Espen Barth Eide, designado en agosto de 2014 para ese cargo, ha desempeñado un papel destacado en el reimpulso del proceso. En relación al apoyo de países

relevantes en el conflicto chipriota, el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, y su homólogo griego, Alexis Tsipras, han mantenido contacto telefónico de manera regular en torno a diversas cuestiones, incluido el conflicto chipriota, y tras una visita de Tsipras a Turquía en noviembre de 2015, ambos líderes afirmaron que existía una ventana de oportunidad. Según Davutoglu, existía una aproximación común con Grecia con el fin de apoyar las negociaciones de Chipre. También otros actores internacionales, como la UE, han mostrado su apoyo al reimpulso al diálogo. En el marco del proceso, los líderes políticos de Chipre han dado relevancia a que el acuerdo final integre los principios de la UE y el grupo de trabajo sobre cuestiones de la UE se reunió durante la segunda mitad del año para abordar la incorporación del acervo comunitario en la isla. A su vez, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, visitó Chipre en julio en señal de compromiso con el proceso. A su vez, EEUU y Reino Unido también expresaron su confianza en que el proceso avance.

Por otra parte, desde su reinicio en mayo, el proceso negociador avanzó con un ritmo intenso y un amplio despliegue de medidas de confianza y resultados preliminares. Así, durante 2015 se produjeron numerosas rondas a nivel presidencial y de equipos negociadores así como de niveles inferiores técnicos. En señal de compromiso real, se pusieron en marcha medidas de confianza desde el inicio. Entre ellas, ya en la reunión conjunta previa al reinicio de las negociaciones formales, Anastasiades facilitó información de coordenadas de campos de minas instaladas por la Guardia Nacional chipriota antes de 1974 y Akıncı anunció que se anulaba el requisito de formularios administrativos en los puntos de paso para entrar en la zona turcochipriota. Otras medidas acordadas en mayo incluyeron el compromiso de cooperación para la apertura de nuevos puntos de paso, medidas prácticas para avanzar hacia la interconexión de la red eléctrica, inicio de discusiones y propuestas para la interoperabilidad de la telefonía móvil, prevención de interferencias radiofónicas, y establecimiento de un comité sobre la igualdad de género, así como otro de cultura. A su vez, como parte de la evolución de las discusiones en el proceso negociador, las partes alcanzaron un acuerdo en julio para el respeto a los derechos individuales de propiedad y la creación de una Comisión sobre la Propiedad, con el mandato de resolver reclamaciones bajo criterios acordados y con la participación igualitaria de miembros grecochipriotas y turcochipriotas. Se trata de un tema

Actores internacionales, como la ONU, la UE y actores regionales clave como Turquía y Grecia, han dado su apoyo a la nueva fase del proceso de paz en Chipre

sustantivo del proceso. Según el asesor de la ONU, habrá diferentes alternativas para la regulación del derecho de propiedad, con diversas opciones para que las personas desposeídas a consecuencia del conflicto reclamen sus propiedades. No obstante, durante el año se hicieron evidentes las dificultades en torno a ese y otros temas, y en septiembre las partes reconocían que quedaba por delante un arduo trabajo. Al mismo tiempo, la continuación del proceso hasta finales de año y nuevos acercamiento en diversas áreas continuaban apuntando a la posibilidad de lograr avances hacia una solución definitiva. Así, entre esos otros pasos, se acordó la creación de un Comité Técnico sobre Educación dirigido a promover medidas de confianza en el ámbito educativo y buenas prácticas en educación para la paz, medida acordada tras incidentes en que escolares grecochipriotas atacaron vehículos turcochipriotas en la capital en noviembre.

Otro factor que ha acompañado el proceso, y que ha contribuido a crear un clima social más favorable a una salida negociada, es la movilización de actores locales no gubernamentales, incluyendo líderes religiosos, actores económicos, organizaciones de mujeres, actores del ámbito del deporte, entre otros. Se trata de un factor que pese a no ser novedoso ha continuado en el tiempo, ampliando apoyos sociales a una solución y erosionando líneas divisorias. Así, por ejemplo, Anastasiades y Akıncı se reunieron en septiembre con los líderes religiosos de la iglesia ortodoxa cristiana, armenia, maronita y católica y con el líder musulmán turcochipriota (Gran Muftí). En cambio, y pese al peso de las mujeres en movilizaciones de paz en Chipre, se continuó denunciando que las negociaciones carecían de perspectiva de género. Así, pese al anuncio en mayo sobre la creación de un comité sobre igualdad de género, apenas trascendió información sobre su alcance y actividades.

En definitiva, en su conjunto se da un cúmulo de factores y condiciones favorables a un proceso negociador que puede ser el definitivo para la consecución de una solución negociada en Chipre. Al mismo tiempo, la experiencia acumulada de fracasos anteriores recuerda que los temas divisorios son complejos y los desacuerdos sustantivos y que los acuerdos entre las élites negociadores no siempre obtienen después el respaldo de la población si ésta no es incluida a lo largo de todo el proceso. Se requieren, por tanto, grandes esfuerzos para que el 2016 sea un año decisivo para la transformación del conflicto en Chipre.

5.2. Nueva era política en Burkina Faso tras concluir la etapa de transición

El 29 de noviembre de 2015 Burkina Faso celebró sus primeras elecciones presidenciales y parlamentarias luego de la caída del régimen de Blaise Compaoré. Los comicios, que han supuesto el cierre de la etapa del Gobierno de transición en el país, han devuelto al pueblo burkinés el control de las instituciones políticas tras 18 meses, abriendo una nueva etapa democrática. Las elecciones han tenido una importante repercusión histórica, ya que representan los primeros comicios abiertos en décadas, siendo las primeras después de 27 años en las cuales no aparece el nombre de Compaoré en las papeletas, y sobre todo, porque el nuevo presidente entrante se ha convertido en el primer civil elegido como jefe de Estado en cincuenta años. Todo ello está representando para la sociedad burkinesa el comienzo de un nuevo periodo democrático, en el cual la retirada del Ejército de la vida política será uno de los elementos centrales que permitan consolidar la nueva era.

La celebración de las elecciones presidenciales y legislativas representaban el último paso del periodo de transición abierto en el país tras la caída del régimen de Compaoré, producido el 31 de octubre de 2014 después de 37 años en el poder, gracias a una histórica insurrección del pueblo burkinés contra el intento de reformar la Constitución para optar a una nueva reelección presidencial. La Constitución impedía a Compaoré ser reelegido nuevamente, ya que en ella se estipulaba que el presidente del país únicamente podía ser elegido en dos periodos presidenciales de cinco años cada uno, período que el presidente ya había cumplido. Las revueltas populares que dieron pie a la caída del régimen evitaron la aprobación de la reforma constitucional y supusieron la apertura de un proceso de transición bajo liderazgo civil –aunque con presencia del Ejército–, que contempló el nombramiento de un presidente civil interino, Michel Kafando, así como la celebración de elecciones presidenciales y legislativas tras un año de transición –entre otras medidas–. En un inicio las elecciones que debían culminar la etapa transicional, estaban previstas para desarrollarse durante el mes de octubre de 2015, sin embargo, el golpe de Estado del 16 de septiembre –el sexto en la historia del país desde que obtuviese su independencia– por el Regimiento de Seguridad Presidencial (RSP) –un cuerpo de élite creado bajo el régimen de Compaoré compuesto por alrededor de 1.200 efectivos militares–, disolvió las instituciones y el Gobierno de transición y obligó a retrasar los comicios. El general Gilbert Diendéré –

El nuevo escenario político nacional en Burkina Faso caracterizado por una mayor pluralidad, representa el fin del sistema de dominio de partido único de Estado, abriendo un nuevo marco político para la consolidación de la democracia

quien había sido la mano derecha de Compaoré durante su régimen– asumió el poder poniendo en riesgo la continuidad de la transición abierta en el país. Sin embargo, nuevamente la sociedad civil burkinesa, encabezada por el movimiento ciudadano Balai Citoyen, volvió a tomar las calles para defender la transición. La presión ciudadana y las reacciones de la comunidad internacional frente al golpe –organismos como la ONU, UA, CEDEAO, Francia y EEUU, entre otros, condenaron la nueva desestabilización del país–, obligó a los golpistas a desistir de sus intenciones y a entregar nuevamente el poder a las autoridades de transición. El Gobierno fue restaurado días después del golpe, e inmediatamente acordó la disolución de la RSP, su desarme, la detención de los responsables, así como un nuevo calendario para la celebración de los comicios.

Sin lugar a dudas, este acontecimiento significó la mayor amenaza que vivió el país a lo largo de los 18 meses de transición, proceso que estuvo marcado por otros importantes obstáculos, sobre todo vinculados a la suspensión realizada al partido de Compaoré, el Congreso por la Democracia y el Progreso (CDP), y otras fuerzas y movimientos afines al antiguo régimen, a los cuales se les impidió participar en la vida política así como a presentarse a las elecciones. La nueva ley electoral emitida por las autoridades de la transición, prohibió a los miembros afines al depuesto Compaoré poder presentarse a las elecciones, lo cual incrementó las tensiones en el país. En este escenario, las elecciones presidenciales y legislativas se presentaban como el cierre definitivo de la etapa del régimen anterior y el inicio de un nuevo periodo en la historia del país.

El 29 de noviembre, el pueblo burkinés eligió como nuevo presidente –con un 60% de participación del censo electoral– a Roch Marc Christian Kaboré, candidato del partido Movimiento Popular para el Progreso (MPP),¹ quien se impuso en la primera vuelta con el 53,49% de los votos a Zéphirin Diabré, de Unión para el Progreso y el Cambio (UPC), que obtuvo el 29,65%. En las legislativas –donde concurrieron la histórica cifra de 99 diferentes partidos políticos– los resultados estuvieron mucho más repartidos, no obteniendo ningún partido político la mayoría absoluta,² lo cual obliga a generar coaliciones y pactos para gobernar, incrementando la pluralidad del sistema político del país, aunque también sienta las bases de la fragilidad del nuevo Gobierno. Las elecciones fueron

1. El partido Movimiento Popular para el Progreso (MPP) fue creado por Kaboré luego de su ruptura con el entonces partido hegemónico de Compaoré, el CDP, en enero de 2014, debido al intento de reforma constitucional para posibilitar una nueva reelección del presidente. El MPP se caracteriza por ser un partido de centroizquierda, aunque en sus filas incluye a muchos ex miembros del CDP.

2. El partido de Kaboré (MPP) obtuvo 55 de los 127; el UPC de Diabré 33 escaños; los partidarios del régimen anterior lograron 18 escaños; el partido sankarista (UNIR/PS) 5 escaños.

declaradas por los diferentes organismos de observación –nacionales e internacionales–, como libres, limpias, transparentes, pacíficas y válidas, y todas las fuerzas políticas participantes reconocieron sus resultados. Ello representa, sin duda, un paso adelante en la historia nacional burkinesa, ya que anteriormente, durante el régimen de Compaoré, los partidos opositores frecuentemente boicoteaban los comicios y no reconocían sus resultados.

La victoria del MPP de Kaboré, si bien abre un nuevo camino en la historia de Burkina Faso, ha generado en diferentes analistas incertezas sobre la capacidad de ruptura con el régimen anterior, debido a que el MPP y su candidato Kaboré emergen del anterior partido de gobierno, el CDP. Kaboré ocupó los cargos durante la etapa de Compaoré, de primer ministro, presidente de la Asamblea Nacional y presidente del partido CDP. Sin embargo, el nuevo presidente electo había renunciado a sus cargos en oposición al intento de reforma constitucional para alterar los límites del mandato presidencial, uniéndose a la oposición y a las movilizaciones populares que precipitaron la caída del régimen. Este pasado genera dudas sobre las capacidades del MPP de romper con la vieja política, sin embargo, el escenario resultante de la elecciones, caracterizado por una mayor pluralidad de fuerzas políticas nacionales que obliga a los partidos a dialogar, representa para Burkina Faso una política más competitiva y el fin del sistema de dominio de partido único de Estado, hechos que hacen que el marco con el cual se cierra la transición sea propicio para romper con los resquicios del antiguo régimen.

En esta nueva etapa que empieza el país seguirá siendo fundamental para el control de las instituciones y la consolidación de la democracia la fortaleza del movimiento ciudadano, que ha mostrado con creces su capacidad de articulación y movilización. Acontecimientos como las movilizaciones que lograron precipitar la caída del régimen de Compaoré o la resistencia civil frente al golpe de Estado de la guardia presidencial –contribuyendo a su fracaso–, han puesto de manifiesto las capacidades de la sociedad civil del país,

que sin duda seguirán jugando un papel fundamental como garantes de la nueva política nacional.

Por otro lado, la reforma del sector de seguridad, sobre todo en lo concerniente a las Fuerzas Armadas, cuya comisión encargada ya fue establecida por el Gobierno interino de Michel Kafando, se presenta a su vez crucial para relegar de manera definitiva al Ejército del control del aparato político nacional. En junio de 2016 la comisión encargada deberá presentar la propuesta de reforma, que incluya la prohibición permanente sobre la participación de los militares en la política así como propuestas para el fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas y de buen gobierno del aparato castrense. En este apartado, la disolución de la guardia presidencial ha significado un gran paso para la estabilidad nacional, aunque falta por ver la capacidad del Estado para recolocar a los miembros de este cuerpo en otros estamentos castrenses y evitar que vuelvan a representar un factor de inestabilidad para el país.

Al respecto cabe resaltar, y en clave de principales factores de riesgo a considerar en la nueva etapa burkinesa, la detención y posteriores procesos judiciales abiertos contra el general Diendéré, líder del RSP, acusado por el tribunal militar de ser el responsable directo del golpe de Estado –con cargos de alta traición– así como co-responsable junto con otras diez personas, de la muerte del ex presidente Thomas Sankara, casos que sin duda pueden abrir viejas heridas y representar inestabilidad para el país. Por otro lado, otro factor que puede incidir negativamente en la estabilidad nacional, lo representa la desestabilización regional, marcada por los conflictos armados en Malí y Nigeria, y el impacto que éstos puedan tener en las fronteras nacionales.

Aun existiendo algunos factores de riesgo que pueden desestabilizar la consolidación de la democracia en el país, las perspectivas que ha abierto el cierre del periodo transicional, aunadas a la fortaleza de una sociedad civil que ha dado buena muestra de su papel como garante de la democracia, están generando en la sociedad burkinesa grandes esperanzas en el nuevo periodo político que empieza.

La reforma del sector de seguridad edn Burkina Faso se presenta crucial para relegar de una vez por todas al Ejército del control del aparato político nacional

5.3. La exploración de escenarios de paz en el sur de Tailandia

Durante el 2015 se reanudaron, con la facilitación del Gobierno de Malasia, los contactos y las conversaciones exploratorias entre Bangkok y las principales organizaciones insurgentes que operan en las provincias sureñas de mayoría musulmana con el objetivo de reivindicar la independencia, autodeterminación o singularidad cultural y religiosa de la región que anteriormente había sido el sultanato de Patani. Estas conversaciones exploratorias son las primeras que se producen tras el colapso del último proceso de diálogo a finales del 2013 y tras el golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas de mayo de 2014. Las perspectivas de lograr un acuerdo a corto plazo parecen sumamente improbables, principalmente por la negativa tajante de la Junta Militar a asumir las principales demandas sustantivas de los grupos insurgentes, por las dudas expresadas por el más importante de los grupos armados en el sur a entablar negociaciones con el Gobierno, y por el carácter transitorio de la actual Junta Militar, que en principio debería ser disuelta tras la aprobación de una nueva Constitución y la celebración de elecciones en una fecha aún por determinar. Sin embargo, a pesar de las dificultades que experimentan las conversaciones y del escepticismo que han expresado algunos analistas acerca del futuro del actual proceso de diálogo, existen algunos motivos para pensar que durante el 2016 ambas partes pueden avanzar sustancialmente en la comprensión de sus respectivas demandas, en la identificación de aspectos compartidos y en la generación de confianza mutua. En definitiva, a la espera de unas mejores circunstancias políticas, las actuales conversaciones exploratorias podrían sentar las bases de un proceso de negociación formal para resolver o canalizar el conflicto armado, actualmente uno de los más virulentos de todo el Sudeste Asiático.

Uno de los aspectos que genera mayor optimismo respecto de las perspectivas del actual proceso de diálogo es que en el año 2015 se cumplieron parcial o totalmente las tres condiciones que en diciembre de 2014 acordaron los primeros ministros de Tailandia, Prayuth Chan-ocha, y de Malasia, Najib Razak, para el inicio de un proceso de paz: una reducción sustancial de la violencia antes del inicio de las negociaciones; la inclusión de todos los grupos armados que operan en el sur de Tailandia; y la presentación de demandas comunes o unificadas por parte de las organizaciones insurgentes. Respecto del primer punto, tanto el Gobierno como varios centros de investigación han constatado una notable reducción de la violencia en las tres provincias meridionales de mayoría musulmana durante el año 2015. Bangkok incluso ha señalado que ésta se ha reducido aproximadamente a la mitad. Los motivos de esta disminución son variados y seguramente incluyen, como sostiene el Gobierno, una

mayor eficacia de los cuerpos de seguridad del Estado y una mayor colaboración de la ciudadanía en las operaciones de contrainsurgencia, pero tampoco habría que descartar que las cúpulas de las organizaciones armadas hubieran decidido rebajar la intensidad de su lucha armada como gesto de buena voluntad y como demostración de su capacidad de influencia sobre los combatientes en el terreno. Cabe señalar que uno de los principales motivos para el colapso del último proceso de paz fue la incapacidad del grupo armado presente en la mesa de negociación, el BRN, de demostrar una ascendencia y control real sobre los combatientes en el terreno y de lograr una reducción de la violencia durante el Ramadán de 2013.

En 2015 se cumplieron parcial o totalmente las tres condiciones que acordaron los Gobiernos de Tailandia y Malasia para el inicio de un proceso de paz: una reducción sustancial de la violencia antes del inicio de las negociaciones; la inclusión de todos los grupos armados que operan en el sur de Tailandia; y la presentación de demandas comunes o unificadas por parte de las organizaciones insurgentes

Respecto de los otros dos principios acordados por los Gobiernos de Tailandia y Malasia –la inclusión de todos los grupos armados en las conversaciones de paz y la presentación de demandas unificadas– en 2015 se creó una organización paraguas, denominada Mara Patani (Majilis Sura Patani, o Consejo Consultivo de Patani), que agrupa a los seis grupos armados que operan en el sur del país: el BRN, el GMIP, el BIPP y tres facciones de PULO. Durante su presentación en el mes de agosto, los representantes de Mara Patani declararon su intención de utilizar el diálogo y otros cauces pacíficos para conseguir el fin del conflicto y lograr una solución basada en el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo de Patani. Asimismo, señalaron que su demanda de mínimos pasaba por la formación de una región autónoma con competencias en materia fiscal, de seguridad local y de gestión de recursos naturales, con reconocimiento oficial de la lengua malaya y el alfabeto jawi, aplicación de la sharia a la población islámica e introducción del sistema islámico de educación.

Además, Mara Patani también planteó tres precondiciones al diálogo: garantías de seguridad e inmunidad para sus negociadores; reconocimiento de Mara Patani como legítima representante de las mencionadas seis organizaciones armadas; y reconocimiento oficial por parte del Gobierno y el Parlamento de que el proceso de paz forma parte de la agenda nacional y es una política de Estado, independientemente de los cambios de Gobierno que pudieran producirse en el futuro. Más allá de la cohesión interna de Mara Patani y de la voluntad del Gobierno de asumir alguna de sus propuestas o condiciones, varios analistas pusieron en valor la importancia de haber logrado esta plataforma común entre organizaciones insurgentes con trayectorias, composiciones y objetivos dispares tras muchos meses de reuniones discretas y la participación decisiva del Gobierno de Malasia, que históricamente había tenido ascendencia sobre algunos de estos grupos insurgentes.

Otro de los aspectos positivos que algunos analistas han destacado es que la Junta Militar reconoció en varias ocasiones durante el año que las estrategias contrainsurgentes que ha practicado el Estado desde el año 2004, fecha de reinicio del conflicto armado, han sido equivocadas o insuficientes, de modo que la única opción para poner fin al conflicto o reducir sustancialmente la violencia era a través del diálogo y la cooperación entre el Estado, los grupos insurgentes y la población civil. Este reconocimiento del diálogo como una estrategia más (aunque no exclusiva) para canalizar el conflicto armado por parte de la Junta militar es aún más relevante si se tiene en cuenta que anteriores procesos de negociación, y en particular el que transcurrió en 2013 bajo Gobierno de Yingluck Shinawatra, contaron con la férrea oposición de las Fuerzas Armadas y de las principales instituciones de seguridad del país. Así, el hecho de que sea precisamente una Junta Militar la que impulse un proceso de diálogo reduce sustancialmente las posibilidades de que el boicot por parte de determinados sectores del Estado debilite o bloquee las conversaciones de paz. En este sentido, algunos informes han destacado que el actual panel negociador gubernamental, liderado por el ex general Aksara Kerdphol, es mucho más coherente y cohesionado que el del anterior Gobierno. De igual modo, el hecho de que tras 12 años de lucha armada el movimiento insurgente no haya obtenido ni una sola concesión significativa por parte del Estado habría provocado entre determinados sectores un cierto desánimo y a la vez incentivado una mirada más posibilista y pragmática entre algunos dirigentes insurgentes.

A pesar de todos estos aspectos positivos, numerosos informes han puesto en duda las posibilidades de éxito del actual proceso negociador por la falta de voluntad política de ambas partes y por las circunstancias políticas y sociales que atraviesa Tailandia. Bangkok ha rechazado categóricamente y en varias ocasiones el núcleo fundamental de las demandas del movimiento insurgente: desde el reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo patani hasta la concesión de autonomía o incluso descentralización administrativa para las provincias sureñas de mayoría musulmana. Además, también se ha mostrado reacio a aceptar algunas de las condiciones procedimentales planteadas por Mara Patani, como su reconocimiento formal como interlocutor, la inclusión del proceso de paz en la agenda nacional o la aceptación de observadores internacionales. Respecto de este último punto, los sucesivos Gobiernos tailandeses siempre han considerado el conflicto en el sur del país como un tema estrictamente interno y han sido reacios a cualquier tipo de internacionalización de la resolución de la disputa. En este sentido, fuentes periodísticas revelaron que el Gobierno es incluso temeroso de que Mara Patani, presentándose como una coordinadora de grupos insurgentes, logre una visibilidad y relevancia internacionales que Bangkok no desea. Por tanto, según algunos analistas, el actual Gobierno es preso de su propio nacionalismo y visión unitarista y homogénea del país y, en consecuencia, no puede ofrecer nada que

pueda ser atractivo para los grupos insurgentes. Según estas visiones, Bangkok estaría tratando de atraer al movimiento insurgente a la mesa de negociación con el objetivo de conseguir una reducción o eliminación de la violencia (de aquí su insistencia en acordar zonas de seguridad o libres de violencia con los grupos armados) o bien lograr su rendición o desmovilización sin apenas coste político alguno.

Desde el punto de vista de la insurgencia, el principal escollo del actual proceso es que parece no estar clara la posición del principal grupo armado en el sur del país, el BRN, respecto del proceso de paz. Oficialmente forma parte de Mara Patani (de hecho, el presidente de dicha organización es miembro del BRN), pero poco después de la presentación pública de esta plataforma unitaria varios representantes del BRN emitieron un comunicado en el que criticaban duramente al Gobierno por falta de voluntad política y en el que afirmaban claramente no participar de las negociaciones. Según algunas fuentes, un núcleo dirigente importante dentro de BRN es reacio al actual proceso de paz y es partidario de retomar las negociaciones con un Gobierno electo que no esté sujeto a la interinidad de la actual Junta Militar y que no se oponga tan claramente como el actual Ejecutivo a algunas formas de autonomía o descentralización. Sea como sea, no está claro si las declaraciones contrapuestas respecto del proceso de paz emitidas por miembros distintos del BRN reflejan un cierto faccionalismo interno dentro del grupo o bien es una estrategia del BRN para mantener el control de Mara Patani y a la vez poner presión sobre la Junta Militar. En cualquier caso, parece fuera de toda duda que la posición del BRN acabará siendo determinante para el futuro de la región por ser el grupo responsable de la inmensa mayoría de actos de violencia cometidos por la insurgencia. Según algunas fuentes, el resto de grupos de Mara Patani apenas tienen incidencia en la violencia en las provincias de Yala, Pattani y Narathiwat y participarían en la mesa de negociación para tratar de obtener determinadas contrapartidas.

En resumen, las dificultades que enfrenta el proceso de diálogo son tan considerables que resulta improbable que se produzca un acuerdo de paz (o incluso un acercamiento de posturas en cuanto a los contenidos) a corto plazo. Sin embargo, tanto el Gobierno como Mara Patani han declarado en varias ocasiones su compromiso hacia el proceso negociador y en ningún momento del año, ni siquiera ante actos de violencia de envergadura, se han interrumpido los contactos. Los numerosos encuentros discretos que se produjeron durante el 2015 desembocaron a finales de año en una propuesta del Gobierno de conformar un grupo de trabajo conjunto –con participación de organizaciones de la sociedad civil– para abordar paralelamente temas de seguridad, desarrollo y justicia. Teniendo en cuenta la polarización social y política que ha sufrido Tailandia desde principios del siglo XXI y la intensidad del conflicto armado desde el año 2004, cualquier intento de diálogo debería considerarse como un aspecto positivo en la resolución de un conflicto armado que parece improbable que pueda solucionarse a través de cauces militares.

5.4. La transición a la democracia y la paz en Myanmar

Desde que en el año 2011 Myanmar emprendiera la senda de la transformación política y la transición hacia la democracia tras la disolución de la Junta Militar y la conformación de un Gobierno de carácter civil, el país ha experimentado cambios importantes. Si bien quedan numerosos retos pendientes en materia de respeto a los derechos humanos, seguridad y democracia, 2015 ha sido un año de acontecimientos cruciales para la profundización de esta transición, especialmente la celebración de elecciones generales en el mes de noviembre y la firma del acuerdo de alto el fuego con diversos grupos insurgentes en octubre.

Las elecciones otorgaron una abrumadora mayoría al principal partido de la oposición, la NLD liderada por Aung San Suu Kyi. La NLD obtuvo el 79% de los escaños electos en unas elecciones en las que los incidentes tuvieron un carácter menor, teniendo en cuenta las condiciones del país. Incluso sumando el 25% de los escaños reservados al Ejército, la NLD mantiene la mayoría, lo que le permitirá legislar y, al mismo tiempo, designar a dos de los tres candidatos presidenciales y elegir al futuro presidente del país. Este resultado, que ha sido aceptado sin reticencias por el Gobierno actual, permite identificar una importante oportunidad para la consolidación de la democracia en el país en un futuro cercano, aunque no exenta de riesgos e incertezas, en un contexto plagado de dificultades políticas y de seguridad.³ Las elecciones fueron consideradas creíbles por los observadores y, aunque se produjeron algunos incidentes, en general fueron calificadas como justas y transparentes.

El Gobierno que finalmente resulte de estas elecciones, y que se formará en marzo será el primero elegido por las urnas y formado sin la tutela militar directa o indirecta de las últimas cinco décadas. La líder Aung San Suu Kyi, que no podrá ser la presidenta del país puesto que la Constitución impide que alguien con hijos extranjeros detente este cargo, ha invitado al jefe de las Fuerzas Armadas, al actual presidente y al portavoz del Parlamento a iniciar un diálogo sobre un futuro Gobierno de reconciliación nacional. La capacidad de la NLD, y particularmente de su líder para gestionar las relaciones con los representantes del antiguo régimen será un factor clave para el eventual éxito de la transición, puesto que las Fuerzas Armadas retienen importantes dosis de poder en el país. A los escaños directamente reservados para el estamento militar se une la provisión constitucional que asigna la gestión de los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos al Ejército, carteras cruciales en un país como Myanmar. Así pues, de la habilidad para tejer un diálogo constructivo dependerá en gran parte

la posibilidad de que la NLD pueda consolidar su poder y garantizar la sostenibilidad de la transición y de los cambios políticos e institucionales que puedan tener lugar. Uno de los temas centrales del debate político del país seguirá siendo la cuestión de la reforma Constitucional, de máxima prioridad para la NLD. En la actualidad el Ejército tiene capacidad efectiva de veto de cualquier reforma, así que cualquier paso que quiera darse en este sentido tendrá que pasar necesariamente por un pacto con los militares. Sin lugar a dudas las negociaciones serán complejas y el juego de equilibrio entre transformación y sostenibilidad requerirá de la mayor habilidad negociadora. La NLD deberá tratar de poner en valor la legitimidad que las urnas le han otorgado, pero debilitar el poder del hasta ahora casi omnipotente estamento militar no será un reto fácil. Sin una profunda transformación de las Fuerzas Armadas difícilmente podrá consolidarse la democracia en Myanmar.

Las elecciones han puesto de manifiesto el elevado apoyo popular que tiene la NLD y el rechazo mayoritario al actual Gobierno. Así pues, la NLD cuenta con una enorme legitimidad para su acción política. Sin embargo, las expectativas que se han creado en torno a su victoria y su capacidad para transformar la realidad política y social del país pueden derivar en una enorme frustración, puesto que las limitaciones existentes son enormes y difícilmente podrán ser superadas en el corto plazo. Así pues, la NLD tendrá que gestionar estas expectativas para que el apoyo masivo no derive en un descontento social generalizado que ponga en peligro su acción de Gobierno. Por otra parte, la gestión de la tensión en torno a la situación de la población rohingya será otra de las cuestiones cruciales a las que deberá hacer frente y una prueba de fuego para la calidad democrática del país.

En paralelo a las elecciones y al proceso político, en el mes de octubre se produjo la firma de un acuerdo de alto el fuego entre el Gobierno y ocho grupos armados insurgentes de adscripción étnica –KNU, KNLA-PC, DKBA, Pa-O NLO, CNF, ALP, ABSDF y RCS/SSA–. El proceso para lograr el fin del conflicto armado en Myanmar se había iniciado en el año 2011, con la firma de acuerdos de alto el fuego de carácter bilateral entre el Ejecutivo y 14 grupos armados entre 2011 y 2013. El acuerdo logrado en 2015 fue fruto de un largo proceso negociador que había incluido a 15 grupos armados, aunque finalmente siete quedaron fuera de la firma. Como han señalado algunas voces, si bien el acuerdo está lejos de ser óptimo, allana el camino a un acuerdo político mucho más amplio.⁴ El proceso

En 2015 Aung San Suu Kyi obtuvo la victoria en las urnas en Myanmar y se logró la firma de acuerdo de alto el fuego con ocho grupos insurgentes

3. International Crisis Group, *The Myanmar Elections: Results and Implications*, Asia Briefing N°147, 9 de diciembre de 2015; Transnational Institute, "The 2015 General Election: A New Beginning?" *Transnational Institute*, 4 de diciembre de 2015.

4. International Crisis Group, *Myanmar's Peace Process: A Nationwide Ceasefire Remains Elusive*, Asia Briefing N°146, 16 de septiembre de 2015; Horsey, Richard, "The Importance of the Myanmar Peace Deal", *In Pursuit of Peace*, International Crisis Group, 16 de octubre de 2015.

negociador y el acuerdo de alto el fuego firmado han servido para fortalecer la agenda de la paz en el país, dar mayor visibilidad y legitimidad a los actores étnicos y romper algunos tabúes como la organización territorial del país y el reconocimiento a las minorías. El hecho de que se consiguiera su firma antes de la celebración de las elecciones fue un logro importante, ya que de lo contrario los riesgos se incrementaban notablemente, puesto que la formación del nuevo Gobierno resultante de las elecciones implicaría por una parte un retraso en la firma y, por otro, riesgos añadidos al producirse un cambio en la interlocución directa. De hecho, el texto del acuerdo alcanzado fue aceptado por todos los grupos que participaron en las negociaciones, incluso por los que finalmente no se adhirieron, y la única cuestión que quedó sin acordar fue la de qué grupos podían firmarlo. Otro de los puntos que ha sido identificado como fortaleza en el marco de este proceso es el carácter nacional e interno, ya que la presencia y apoyo internacional, al menos públicamente, ha sido mínimo.

Así pues, si bien se trató de un acuerdo de enorme importancia que abre la puerta a uno posterior que permita poner fin al conflicto armado en el país, los riesgos que se derivan del proceso son numerosos. En primer lugar, aunque el acuerdo de alto el fuego ha sido bautizado como “de alcance nacional” –*nationwide ceasefire*– un gran número de grupos insurgentes han sido excluidos, ya que el Gobierno se negó a que aquellos grupos con los que no había un acuerdo de alto el fuego bilateral previo firmaran el acuerdo conjunto. Especialmente importante es el hecho de que el UWSA, el SSA o el KIA, grupos que controlan amplios territorios y que poseen numeroso armamento, hayan quedado fuera del acuerdo. Los enfrentamientos armados han persistido en los últimos meses y se han registrado choques entre las Fuerzas Armadas y especialmente KIA, SSA-N, TNLA, MNDAA y AA. Como consecuencia de los enfrentamientos se han continuado produciendo desplazamientos forzados de población civil, lo que pone de manifiesto las difíciles condiciones de seguridad en las que vive gran parte de la población en las zonas

afectadas por la violencia y el serio impacto que ésta continúa teniendo en la vida cotidiana.

A los riesgos evidentes que se derivan de la persistencia de la violencia se unen otros de carácter político, principalmente el cambio que se producirá en el equipo negociador gubernamental como consecuencia del resultado de las elecciones. Aunque un representante de la NLD asistió a la ceremonia del acuerdo, el partido no estuvo representado al más alto nivel ni participó en la firma, alegando que la exclusión de diferentes organizaciones insurgentes le restaba el carácter de “alcance nacional” y lo hacía parcial, contribuyendo a crear malentendidos entre las organizaciones firmantes y las excluidas. Los próximos meses serán decisivos para el futuro de las negociaciones políticas con la insurgencia y también para la posibilidad de que más grupos armados se unan al acuerdo de alto el fuego. Por su parte la insurgencia, en el marco de la coordinadora UNFC que agrupa a 11 grupos armados ya ha anunciado la formación de un comité para iniciar conversaciones con la NLD.⁵

Myanmar atraviesa un momento crucial para el futuro del país. Los retos, tanto en materia de democratización como de seguridad son numerosos y acuciantes, y obligan a análisis prudentes alejados de cualquier triunfalismo. Por una parte, el Ejército, máximo exponente del antiguo régimen, detenta un enorme poder y cuenta con una gran capacidad de control de las instituciones políticas del país, lo que supone un importante lastre para cualquier avance democratizador. Por otra parte, la violencia armada persiste con cierta intensidad y un gran número de grupos, algunos con importante capacidad militar, han sido excluidos del acuerdo de alto el fuego. No obstante, desde que en 2011 se iniciara la transición en el país, las reformas se han ido consolidando, como muestra de manera especialmente evidente el hecho de que el resultado electoral haya sido aceptado por el hasta ahora Gobierno birmano. Si en 2016 se logra consolidar los avances logrados en los últimos años, la vuelta atrás en Myanmar se alejará del horizonte.

5. Radio Free Asia, “Myanmar Chief Negotiator Briefed Aung San Suu Kyi on Peace Process: NLD”, *Radio Free Asia*, 9 de diciembre de 2015.

5.5. La perspectiva de género en los procesos de paz: inclusividad y sostenibilidad

Los procesos de paz constituyen oportunidades de enorme importancia para la transformación de los conflictos armados, la superación de la violencia y la construcción de sociedades pacíficas y justas. De manera creciente, en los últimos años, el papel de la sociedad civil en la construcción de la paz en las sociedades afectadas por la violencia y la conflictividad armada se ha convertido en un tema de gran relevancia para la investigación para la paz. Más específicamente, uno de los interrogantes centrales gira en torno al papel que la sociedad civil debe jugar en los procesos de paz y cómo debe articularse su participación. Frente a las visiones más clásicas que sostienen que las negociaciones de paz deben primar la presencia de los actores enfrentados en un conflicto armado, con el objetivo de alcanzar acuerdos de paz que de manera eficaz pongan fin a la violencia directa y los enfrentamientos, otras perspectivas apuntan a la importancia de generar procesos inclusivos que conducirían a una mayor sostenibilidad de los acuerdos eventualmente alcanzados.

En paralelo a este debate, tras la aprobación en el año 2000 de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad y la posterior consolidación de la agenda mujeres, paz y seguridad, también se ha puesto de manifiesto la importancia de que los procesos de paz sean a su vez inclusivos desde una perspectiva de género y que no sean reproductores de las dinámicas de desigualdad que relegan a las mujeres del ámbito público. Tradicionalmente, los procesos de paz han sido profundamente excluyentes con las mujeres y patriarcales, en consonancia con las dinámicas que han prevalecido en los conflictos armados. Puesto que los actores sentados a la mesa han sido generalmente quienes se han enfrentado en el campo de batalla, y de manera más específica, las elites de estos grupos, y dado que éstas están fuertemente masculinizadas, las mujeres han tenido pocas oportunidades de participar en la negociación de la paz.

Las investigaciones disponibles sobre la participación de las mujeres en las negociaciones de paz señalan que, aunque se constata un aumento en los últimos años, la presencia de mujeres es muy reducida. Naciones Unidas señalaba en 2012 que en una muestra de 31 procesos de paz entre 1992 y 2012 solo el 2% de mediadores principales, el 4% de testigos y signatarios y el 9% de negociadores eran mujeres.⁶ El informe de 2015 del Secretario General de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad se hace eco de algunos avances parciales,

señalando que de los 12 procesos de paz con apoyo de Naciones Unidas durante el año 2014, en todos los equipos de mediación de la organización había al menos una mujer y en nueve de ellos las mujeres ocupaban cargos senior, lo que representaba un incremento con respecto a años anteriores. Además, en todos los procesos se incluyeron mecanismos de consulta con la sociedad civil y en el 88% de éstos procesos se consultó con organizaciones de mujeres. A pesar de los avances, estas cifras no dejan de mostrar algunos aspectos muy concretos de los procesos de paz y, por otra parte, no permiten una evaluación en profundidad de la capacidad de influencia de las mujeres.

Tratando de ir más allá de los aspectos meramente cuantitativos sobre la presencia de mujeres en los procesos de paz o de otros actores también tradicionalmente excluidos, algunas investigaciones recientes han intentado evaluar el impacto de esta presencia en términos más cualitativos. Diferentes investigaciones han buscado responder a la pregunta de si los procesos de paz más inclusivos tienen mejores resultados, sobre todo en términos de sostenibilidad, que aquellos que no lo son. Aunque se trata de un campo incipiente de investigación, que requiere de mayor desarrollo, las primeras conclusiones apuntan a que la presencia de actores más allá de las partes en conflicto, especialmente de la sociedad civil, incrementa la sostenibilidad de los procesos de paz. Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Uppsala concluyó que aquellos casos en los que se ha alcanzado un acuerdo de paz y ha habido algún tipo de participación de la sociedad civil esta presencia tiene un impacto positivo en la durabilidad de los acuerdos de paz, incrementándola.⁷ Sobre una muestra de 83 acuerdos firmados tras la Guerra Fría, la autora concluye que las posibilidades de fracaso de aquellos acuerdos que han sido firmados con participación de la sociedad civil se reducen en un 64%, frente al 50% en el conjunto de casos.

Otras autoras han puesto el foco de manera específica en el impacto de la presencia de mujeres y, tras analizar 48 casos de negociaciones de paz y transiciones políticas, concluyen que cuando los grupos de mujeres tuvieron capacidad sustantiva de influir en los resultados se incrementaron las probabilidades de que un acuerdo fuera alcanzado y no se produjo ningún caso en el que esta presencia tuviera un impacto negativo.⁸ Solo en un caso con presencia significativa de mujeres no se logró la firma de un acuerdo, frente a seis casos sin

Los acuerdos alcanzados en procesos de paz más inclusivos son más sostenibles

6. UN Women, *UN Women Sourcebook on Women, Peace and Security*, UN Women, 2012.

7. Desirée Nilsson, "Anchoring the Peace: Civil Society Actors in Peace Accords and Durable Peace", *International Interactions*, 38(2), pp.243–266, 2012.

8. Marie O'Reilly, Andrea Ó Súilleabháin y Thania Paffenholz, *Reimagining Peacemaking: Women's Roles in Peace Processes*, International Peace Institute, junio de 2015.

presencia de mujeres en los que no se alcanzaron acuerdos. Según este estudio, además, la presencia de los grupos de mujeres fue crucial para impulsar la firma de acuerdos o superar momentos de estancamiento y también incrementó las posibilidades de que los acuerdos alcanzados fueran implementados.

Así pues, estas investigaciones demuestran que la inclusión de la sociedad civil y, de manera específica, los grupos de mujeres, tiene efectos positivos tanto sobre las posibilidades de alcanzar acuerdos de paz, como sobre su sostenibilidad, sin que de esta presencia se deriven efectos negativos que obstaculicen la firma de acuerdos. Así pues, los argumentos utilizados tradicionalmente para justificar la exclusión de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres apuntando a que su presencia restaba eficacia y efectividad a las negociaciones de paz, se demuestran falsos.

La tendencia recogida en el informe del Secretario General mencionado anteriormente relativa a una creciente presencia de mujeres en las negociaciones de paz representaría una oportunidad para construir procesos más inclusivos y que, por tanto, sean más sostenibles en el tiempo. En paralelo a una mayor inclusividad, otras autoras también han destacado la importancia de que los acuerdos de paz recojan en su contenido la perspectiva de género y constatan también una creciente –aunque insuficiente– referencia a las mujeres y la dimensión de género en los textos firmados. De un total de 1.168 acuerdos de paz alcanzados entre 1990 y 2014, antes de la aprobación de la resolución 1325, el 11% incluían referencias a las mujeres o la dimensión de género, frente al 27% que lo hicieron tras la aprobación de la resolución.⁹ Además, no solo se han incrementado los acuerdos, sino también los procesos en los que se han incorporado

estas menciones.¹⁰ La mayor presencia de mujeres en las negociaciones, así como su creciente capacidad de incidencia en los esfuerzos de construcción de paz fruto de la aprobación de la resolución 1325, podría ser uno de los principales factores explicativos de esta mayor referencia a la dimensión de género en los acuerdos de paz firmados. La presencia de grupos de mujeres con capacidad de influencia ha servido para integrar en las discusiones diferentes cuestiones y preocupaciones concretas en la agenda de las negociaciones¹¹ y esto estaría teniendo efectos materiales en el texto de los acuerdos. La inclusión de los derechos de las mujeres y la perspectiva de género en los acuerdos de paz es de enorme relevancia para el diseño de procesos de rehabilitación posbélicos que sean inclusivos y respetuosos con la igualdad de género.

En conclusión, desde la constatación de que las mujeres han sido tradicionalmente excluidas de las negociaciones, investigaciones han tratado de poner de manifiesto como su inclusión es tanto una cuestión de justicia social como una manera de hacer más sostenibles y efectivos los esfuerzos de construcción de paz. Los resultados de recientes investigaciones revelan los efectos positivos concretos que en términos de sostenibilidad tienen los procesos que responden al principio de la inclusividad, tanto de actores de la sociedad civil en general como de las mujeres específicamente. Por otra parte, permiten apuntar al impacto que esta presencia también puede estar teniendo para generar acuerdos que integren en mayor medida la igualdad de género y cómo esta integración puede derivar en procesos de rehabilitación posbélica más equitativos. Así pues, debe ser una tendencia a reforzar para avanzar en la implementación de procesos que permitan garantizar la construcción de una paz sostenible e incluyente.

9. Christine Bell, *Text and Context. Evaluating Peace Agreements for their 'Gender Perspective'*, Political Settlements and Research Programme, octubre de 2015.

10. En un mismo proceso puede producirse la firma de varios acuerdos, por lo que es importante que la inclusión de la perspectiva de género tenga lugar en acuerdos firmados en diferentes procesos.

11. Marie O'Reilly, Andrea Ó Súilleabháin y Thania Paffenholz, op. cit.